

Informe contraste Chile21

Abril, 2025

1. Análisis político, económico, criminológico e internacional. Daniel Grimaldi, Director Ejecutivo, Catalina Valdés y Tomás Arias, Investigadores de Chile21.p.2.

Análisis político, económico, criminológico e internacional.

Daniel Grimaldi, Director Ejecutivo, Catalina Valdés, y Tomás Arias, Investigadores de Chile21

1. Introducción

Marzo de 2025 marcó un mes turbulento para el oficialismo, dado que figuras importantes del progresismo pasaron por tensiones y escándalos. Esto se enmarca dentro del último año de Gobierno del Presidente Boric, donde deberían comenzar a elaborarse las últimas políticas públicas para que la ciudadanía perciba un legado de las principales corrientes progresistas del país, lo que debe dejar una coalición sólida para ser proyectada en un futuro próximo gobierno. Por el lado económico, se continúan mostrando señales positivas, con crecimiento del Imacec, control de la inflación y récords en exportaciones. Sin embargo, este escenario contrasta con la percepción ciudadana, que sigue mostrando escepticismo frente a los indicadores macroeconómicos.

En el ámbito político, el oficialismo enfrentó fuertes polémicas, como el escándalo de tráfico de influencias que involucró a la diputada Karol Cariola (PC) y la renuncia de la ministra Maya Fernández (PS) tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Posteriormente, abril sorprendió con la destitución de la senadora Allende. Por otro lado, la competencia en la carrera presidencial evidenció tensiones internas, donde Carolina Tohá (PPD) emergió como una figura en ascenso, pese a las divisiones con sectores del Partido Comunista entre quienes apoyan más a Daniel Jadue y quienes son afín a la Ministra del Trabajo Jeannette Jara.

En materia de seguridad, Chile dio un paso significativo al integrarse a la Red ATENAS, fortaleciendo el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado. También, la llegada del ministro Elizalde en la cartera de Interior, se instauró con reuniones vinculadas a retomar lineamientos iniciales del gobierno respecto a la relación del Estado con Carabineros de Chile. No obstante, el brutal asesinato de un matrimonio en Graneros reabrió el debate sobre políticas punitivistas, mientras el Gobierno impulsaba reformas para descentralizar la seguridad pública en coordinación con municipios.

A nivel internacional, la guerra comercial impulsada por Donald Trump y conflictos bélicos, como la guerra en Ucrania, siguieron influyendo en la política exterior y económica del país. Este mes, sin embargo, también se vio marcado por la apertura de El Salvador en recibir presos desde Estados Unidos —con todas las implicancias políticas y legales que supone— y la aparente apertura de Chile por fortalecer (acertadamente) su vínculo con países del grupo BRICS, ante la inestabilidad de la hegemonía estadounidense.

¿Qué implicancias tienen estos hechos para el desarrollo de la política en un año de elecciones presidenciales?

Tópicos:

- Situación política: Escándalos, renunciaciones y carrera presidencial
- Situación económica: Crecimiento, acuerdos entre Gobierno y empresarios y pesimismo persistente
- Seguridad pública: Red ATENAS, coordinación municipal y respuestas al crimen organizado.
- Contexto internacional: Impacto de Trump, conflictos globales y nuevas oportunidades diplomáticas para Chile.

2. Situación política

En marzo comenzó el último año de gestión para el oficialismo. En este mes, tanto el Congreso como la Moneda empiezan su último año de trabajo, a excepción de algunos senadores electos en 2021. Debido a que comenzó el último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo debe empezar a trabajar arduamente en concretar las promesas mediante políticas públicas que satisfagan las expectativas de la población y así tener un clima político más favorable de cara a la elección presidencial de fin de año. No obstante, el oficialismo pasó por duras polémicas, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo, que obstaculizan la proyección política del gobierno y la coalición.

El 3 de marzo la Diputada Karol Cariola (PC) se enfrentó al allanamiento de su vivienda bajo la investigación del caso de Sierra Bella, que involucra la compra de una clínica a sobreprecio por parte de la municipalidad de Santiago bajo la gestión de Irací Hassler (PC). Según la investigación, Cariola operó un supuesto tráfico de influencias dentro de este caso. Si bien los chats entre las dos militantes comunistas no dieron grandes pistas sobre el caso de Sierra Bella, se comprobó que Cariola recurría a Hassler para pedirle favores

administrativos, dada su calidad de alcaldesa. En concreto, Cariola solía pedirle a Hassler facilidades para amigos empresarios. Tras la revelación de este escándalo, el Partido Social Cristiano anunció la censura de Cariola para ser removida de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. No obstante, esta censura fue rechazada gracias a los votos en contra de algunos diputados de centro e independientes. Aun así, las personalidades comunistas no logran alejarse de la polémica. Tras la revelación de los chats entre Hassler y Cariola, el actual alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN) anunció una querrela por tráfico de influencias entre las dos autoridades. Por otro lado, la prensa reveló conversaciones privadas donde Cariola escribe mensajes vulgares y peyorativos contra el Presidente Boric, lo cual no fue mal recibido por el ejecutivo al asegurar que “no me van a poner en contra de compañeras de ruta”. Pero frente a todo este escándalo, Karol Cariola finalmente decidió renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, sosteniendo que esta decisión es necesaria y se enmarca bajo la necesidad de encontrar la tranquilidad que necesita para su vida familiar, dado que la diputada actualmente cuenta con postnatal.

No cabe duda de que este episodio afectará a la coalición oficialista a fin de año y sobre todo al PC. Si Cariola hubiese logrado permanecer en su calidad de Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, el oficialismo tendría mayores probabilidades de tener mejores resultados electorales. En cambio, contar con una de sus figuras más connotadas involucradas en un escándalo restará popularidad a esta coalición. Es sabido que el Partido Comunista no cuenta con un respaldo mayoritario en la población, producto del adoctrinamiento de la dictadura militar (1973-1990), por lo que contar con una militante presidiendo una Cámara del Congreso fue una hazaña para tal partido. Pero este escándalo acrecentará la desconfianza hacia la colectividad. De todos modos, Cariola continúa siendo una de las personalidades más influyentes del progresismo chileno, por lo que el PC no dudará en nominarla candidata a senadora por Valparaíso, donde cuenta con altísimas probabilidades de ser electa. Según encuestas previas, en Valparaíso Cariola lidera la intención de voto senatorial con el 15% de las preferencias, teniendo una alta ventaja para lograr un escaño en el Senado, lo cual no debería verse considerablemente mermado por este escándalo coyuntural. Pero por otro lado, este hecho también perjudica la imagen del Poder Judicial. La filtración de conversaciones privadas hacia la prensa no debería ser parte de una investigación. La filtración de conversaciones privadas le resta confianza al Poder Judicial por invadir la privacidad de los imputados, exponiendo su vida privada en la opinión pública. Con este hecho, no será raro que en futuras investigaciones

otros imputados se opongan a entregar su teléfono dado el peligro que conlleva ser expuesto en la prensa.

Dentro de la Moneda también se vivió un escándalo que involucra a una importante figura del oficialismo. Maya Fernandez (PS) anunció su renuncia como Ministra de Defensa dado que se encuentra siendo investigada por la fallida compra de la casa de su abuelo Salvador Allende. Esta renuncia se concretó una semana después de que Chile Vamos anunció que realizaría una acusación constitucional en su contra. En reemplazo de Fernandez asumió Adriana Delpiano, militante del Partido Por la Democracia (PPD) que cuenta con experiencia trabajando en todos los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría desde la gestión de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero Fernandez no fue la única autoridad de Gobierno que renunció este mes. El ex jefe de asesores del Gobierno Miguel Crispi (FA) también anunció su renuncia el mismo día que la ex Ministra de Defensa. La renuncia de Crispi se enmarca dentro de sus constantes dificultades para gestionar escándalos políticos del Gobierno, incluso guardando silencio cuando debió declarar por el caso Monsalve. Debido a la constante tensión y complicaciones que traía su desempeño como jefe de asesores, Crispi dejó la Moneda para ser reemplazado por el ingeniero Felipe Melo. Felipe Melo es ex dirigente de la FECH e ingeniero civil de la Universidad de Chile. Leonardo Moreno fue otra figura influyente de la Moneda que renunció este mes. La salida de Moreno se debe a que este asesor es abogado, quien ignoró la ilegalidad de la compra de la casa de Allende. Por tanto, Moreno fue una pieza clave para detener la compra. En abril, el Tribunal Constitucional (TC) sorprendió con la destitución de la senadora Allende por la fallida compra de la casa de su padre. Según la prensa, este hecho causó tensiones dentro del oficialismo dado que una de los miembros que aprobaron su destitución es cercana al Frente Amplio. No obstante, el Frente Amplio descarta haber influido en la destitución de Isabel Allende porque el TC es un organismo autónomo.

Puede ser que la fallida compra de la casa de Allende no se realizó con la intención de enriquecimiento ilícito por parte de la Ministra Fernández, quien constitucionalmente no puede tener contratos con el Estado, pero la salida de estas autoridades de la Moneda es una buena señal para la estabilidad política del país. Sea ilegal la compra de la casa o no, la oposición al Gobierno siempre atacará a las figuras del Ejecutivo para tratar de dañar su imagen y tener motivos para captar los votos de los ciudadanos descontentos con el Gobierno, siendo el caso de Fernandez (PS) sería útil a la derecha radical para desacreditar la gestión de la Moneda. Por lo tanto, la salida de Fernandez es una buena señal para la

tranquilidad política del país, dado que ayuda a frenar esta polémica al permitir que una figura involucrada en un escándalo dé un paso al costado. Sin embargo, la acusación constitucional contra Fernandez fue rechazada. El principal argumento por lo cual Fernandez se salvó, radica en que la compra de la casa no se terminó de finalizar dado que Contraloría no aprobó su validez, lo que inhabilita la compra. Pero la fallida compra de la casa de Allende inicialmente venía acompañada de la compra de la casa de Patricio Aylwin, la cual también se dejó de lado tras el escándalo. Frente a esto, la familia de Aylwin ha exigido al Gobierno que responda si continuará la compra. Respecto a la destitución de la senadora Allende, se especula que su caso puede abrir una caja de pandora porque ella no es la única legisladora que ha experimentado contratos con el Estado. Según un artículo en The Clinic, Juan Castro (PSC), Fidel Espinoza (PS), Jaime Mulet (FRVS), Ximena Ossandón (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) son otros legisladores que han realizado contratos con el Estado mediante su participación en empresas o, en el caso de Cruz-Coke, arrendando una propiedad a Junji. Frente a esto, surge la duda ¿Por qué la senadora Allende sí fue destituida mientras estos otros legisladores no? Esta interrogante pone en tela de juicio la efectividad y la objetividad del TC para investigar las malas prácticas políticas. Seguramente, la destitución de la senadora Allende responde al interés de los poderes fácticos por desprestigiar la imagen de la familia Allende. De lo contrario, este organismo debería comenzar a estudiar el caso de los demás legisladores involucrados en estas prácticas y hacer efectivo la ley que prohíbe a las autoridades públicas realizar contratos con el Estado. En los tiempos actuales, la confianza en las instituciones es clave para sostener la estabilidad democrática, por lo que el TC debería actuar acorde a la ley y juzgar a quienes violen las normas constitucionales. De lo contrario, la ciudadanía percibirá un trabajo mediocre o sesgado por parte de esas instituciones, abriendo paso a desconfianza en el Estado y, con ello, el fortalecimiento de figuras autoritarias. Por otro lado, se puede interpretar que para el caso de la senadora Allende el TC tomó una postura muy estricta para apelar a esta norma. De todos modos, todo el equipo de Gobierno tiene cierta responsabilidad en este escándalo, pues sus asesores debieron avisar a tiempo la ilegalidad de comprar la casa de Allende considerando que existen propietarios del inmueble ejerciendo cargos públicos.

Otra figura del oficialismo que dejó su cargo fue Carolina Tohá (PPD), quien se encuentra dentro de la carrera presidencial. Si bien en la Moneda se muestra voluntad para realizar una elección primaria que consolide un candidato único para el progresismo, desde el PC hasta la DC, los demócratacristianos se han mostrado reacios a esta idea. La DC, en

cambio, apuesta por establecer una coalición que reviva la Concertación (PS, PPD, PR, DC), excluyendo al PC y al FA. De hecho, la DC proclamó a su militante Alberto Undurraga como su carta presidencial. En su proclamación Undurraga aseguró que la DC no formará pacto con el oficialismo, dado que no comparten la misma mirada sobre los problemas que necesitan ser resueltos. Además, aseguró que competir con el oficialismo sería buscar la continuidad del Gobierno, lo que directamente conduciría a una derrota electoral. No es novedad que los demócratacristianos se muestren reacios a formar parte de una coalición progresista, dado que históricamente han actuado políticamente de manera pragmática frente a este sector, más no en defensa de un ideario político común. Pero el rechazo de la DC a aliarse con partidos oficialistas no radica únicamente en temas de principios, pues este partido sí aceptó participar en una lista oficialista para las elecciones locales de 2024. Seguramente, los pobres resultados electorales obtenidos por la DC en esta elección sea su motivo más importante para querer apartarse del oficialismo. Debido a que las elecciones de concejales funcionan mediante sistema *D'Hondt*, se pudo esperar que la DC se debería haber beneficiado de los votos a la lista del Gobierno. Pero en cambio, la DC perdió muchos concejales cuando compitió con los partidos oficialistas, cayendo de 315 concejales a solo 162. Así, se puede deducir que el desinterés demócratacristiano radica en sus resultados electorales del año pasado. No obstante, debe considerarse que el desplome electoral de la DC, junto a su aislamiento, puede llevar a la desaparición de tal partido. Por años, la DC ocupó el rol político de ser el centro pragmático que frenaba las ambiciones de la izquierda y la derecha. Por tanto, su desaparición puede conllevar a la polarización de la política chilena al consolidarse dos polos opuestos (izquierda y derecha) que difícilmente llegarán a acuerdos. El desplome electoral de la DC, con su posible desaparición política, haría más complicado impulsar reformas políticas debido a la dificultad de negociar entre los principales sectores políticos.

Pero las tensiones también se encuentran dentro del oficialismo dado que Carolina Tohá aseguró que le costaría apoyar una eventual primaria con el militante comunista Daniel Jadue por su posición favorable al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Frente a esto, Jadue respondió que “aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricaturas de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede”. Obviamente, este hecho causó revuelo dentro del oficialismo dado la influencia con la que cuenta Jadue dentro del PC, uno de los partidos protagonistas de este Gobierno. Dado este desencuentro entre la candidata Tohá y Daniel Jadue, la prensa ha especulado que existiría una tensión

dentro del PC dada la cercanía de Jara a las Moneda. En cambio, los dirigentes más importantes del partido son más cercanos a la figura de Daniel Jadue, abriendo una grieta entre el Gobierno y los dirigentes del Partido Comunista. Este desencuentro se potencia si se considera que se ha especulado la posibilidad de que tanto Jeannette Jara como Daniel Jadue sean las cartas presidenciales del PC, siendo un candidato más cercano a la Moneda y el otro más cercano al Comité Central. No obstante, la misma Ministra Jara (PC) defendió indirectamente a Jadue argumentando que los candidatos presidenciales deben preocuparse de hacer propuestas en vez de atacarse mutuamente. Si bien existe una tensión entre el PC y el Gobierno de cara a las cartas presidenciales, esta no es lo suficientemente fuerte como para enemistar ambas partes. Aunque Jara defiende su partido, es una de las figuras más importantes de la Moneda, lo cual es útil al PC. Como se dijo anteriormente, el PC no goza de una popularidad muy alta en Chile, por lo que les conviene tener una buena cercanía con el Gobierno. De hecho, pese a que Jara es militante comunista logra ser la tercera ministra más valorada del oficialismo según la encuesta Cadem #584, con un 58% de aprobación¹. Finalmente, en febrero el PC anunció formalmente que Jara será su candidata presidencial y a Gonzalo Winter por parte del FA. Así, quedan 3 figuras del oficialismo compitiendo por el oficialismo.

A inicios de mes la ex Presidenta Michelle Bachelet ratificó que no será candidata presidencial, indicando que deben ser otros quienes asuman el desafío y que la buena política exige renovación. Por lo tanto, las principales figuras de la carrera presidencial siguen siendo Tohá, Kast, Kaiser, Matthei, entre otros candidatos poco competitivos. En marzo las encuestas de opinión pública no mostraron gran variación respecto a los meses anteriores. Tanto en la encuesta Cadem como la UDD, las principales figuras que lideran la intención de voto son Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. No obstante, lo llamativo de este mes fue la irrupción de Tohá en las preferencias electorales. Si bien antes Tohá no marcaba más del 3%, tras su anuncio formal como candidata y la baja de Bachelet, la ex Ministra del Interior marca entre un 12% y un 10%. Si bien en la encuesta Critería de marzo de 2025 cuenta con el 3% de la intención de voto, debe considerarse que esta encuesta se publicó antes de que Tohá anunciara su candidatura. No obstante, la encuesta CADEM #584 sorprendió al revelar que Carolina Tohá sería la segunda candidata más votada dentro de la pregunta "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo

¹ T13, 3 de marzo de 2025, Diario USACH, 11 de marzo de 2025, La Tercera, 14 de marzo de 2025, 24 Horas, 15 de marzo de 2025, Diario USACH, 17 de marzo de 2025, Diario USACH, 10 de marzo de 2025, T13, 5 de marzo de 2025, Cooperativa, 17 de marzo de 2025, Diario USACH, 13 de marzo de 2025 T13, 14 de marzo de 2025, La Tercera 19 de marzo de 2025, T13, 25 de marzo de 2025, Diario USACH, 26 de marzo de 2025, T13, 13 de marzo de 2025, El Siglo, 5 de marzo de 2025, The Clinic, 8 de abril de 2025.

domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”. En tal pregunta, Evelyn Matthei lidera la intención de voto con el 29%, mientras que Tohá le sigue con el 22%². Es sabido que Tohá no fue de las ministras mejor valoradas durante su gestión en el Gobierno, pero seguramente tendrá un rápido crecimiento entre las preferencias electorales. Sin embargo, cabe preguntarse si su despegue en las encuestas radica en atributos personales, evaluación de gestión o en la oferta política. Antes de que Tohá anunciara formalmente su candidatura, las encuestas marcaban a Bachelet como la favorita del oficialismo, pero su anuncio puede explicar que gran parte de los votantes identificados con el Gobierno decidan inclinarse hacia Tohá. Otro aspecto llamativo de esta contienda presidencial, es la extensa cantidad de personas que se han inscrito en el Servel para tratar de competir en esta elección. Según los datos del Servel, existen cientos de candidatos independientes que buscan conquistar la presidencia, siendo algunos tarotistas, youtubers, entre otros. Si bien es llamativo la cantidad absurda de personas que se inscriben con intención de ser Presidente, no hay que alarmarse considerando que la mayoría ni siquiera alcanzará las firmas necesarias para formalizar su candidatura. Gracias al acceso a las nuevas tecnologías cualquier ciudadano puede inscribirse a un cargo público mediante el Servel aún cuando sea un desconocido en el espacio público. Por tanto, no hay que observar con mucha seriedad la cantidad de personas inscritas en el Servel sino más bien preocuparse de quiénes tienen chances reales de competir en noviembre.

Entre otros hechos del mes, en el Senado se rechazó la idea de permitir que la Fiscalía levantara el secreto bancario de organizaciones criminales sin autorización judicial. Esta idea tenía por objetivo observar los flujos de dinero de bandas delictivas. Entre los argumentos para rechazar esta idea se encuentra la libertad económica del usuario, siendo un supuesto atentado a la libertad el seguimiento de sus finanzas personales. Pero si la derecha insiste en no levantar el secreto bancario, cuando su principal preocupación es la delincuencia, estaría dando señales de no querer atacar el problema de fondo. El Senado también rechazó la propuesta del Gobierno de limitar el voto migrante a las elecciones legislativas y presidenciales. Según los senadores, esta propuesta está alejada de la idea matriz de proponer multas hacia quienes no asistan a votar. La intención del Gobierno de limitar el voto extranjero no es sorpresiva, pues encuestas previas han demostrado que los extranjeros muestran mayor preferencia política por la derecha. Por tanto, los partidos progresistas tendrán que enfrentarse a un duro panorama electoral contando con el voto

² [Diario Financiero, 5 de marzo de 2025](#), [La Tercera, 24 de marzo de 2025](#), [T13, 25 de marzo de 2025](#).

migrante, el cual potencialmente llegaría a un millón de sufragios favorables a la derecha. Con el voto migrante, el oficialismo tiene más cercadas sus posibilidades electorales³.

3. Situación económica

De igual modo que en los meses anteriores, mantiene proyecciones positivas dentro de la moderación de las expectativas. Gracias al impulso del comercio, el Imacec de enero tuvo un incremento del 2,5%, cifra de crecimiento de la actividad comercial por sobre lo proyectado. Aunque el desempleo en la población extranjera creció, se registró una caída en los niveles de empleo informal. La Dipres informó que los ingresos fiscales crecieron un 16,4% anual, favorecido por el aumento de la tributación de la minería privada (31,6%), aunque disminuyeron los ingresos provenientes de otros tributos. En tanto aumentaron los ingresos, los gastos crecieron un 11,8%, por la subida de gastos corrientes y de capital, especialmente en salud y ajustes salariales del sector público.

El INE reportó que los sueldos en Chile llevan 21 meses consecutivos en crecimiento, anotando un alza interanual del 9%. La empresa estatal Enap cerró 2024 con más de 400 millones de dólares en utilidades, lo cual viene acompañado de una baja en su deuda, favorecido por el incremento de su producción en un 28%. Gracias a que el cobre alcanzó el precio de 5\$ por libra, el peso chileno logró fortalecerse frente al dólar, llegando a 920 por cada dólar, el valor más bajo desde octubre de 2024. Se anunció que en febrero el IPC tuvo una modesta alza de tan solo el 0,4%, llegando a una inflación acumulada del 4,7% en 12 meses. Entre las mercancías que aumentaron su precio destacan el transporte, vivienda, servicios, el pan y la gasolina. El Gobierno inició antes de mayo la identificación para ejecutar proyectos de inversión pública por 4,8 billones, generando empleabilidad y un mejor uso de recursos. Por otro lado, el Gobierno notificó cifras récord en la exportación de bienes (+5,8%) y servicios (25%), traducándose en ingresos de 18.974 millones de dólares. Enap reportó caídas en precios de las bencinas de hasta 28% por litro. El buen ritmo de la economía también se reflejó dentro de las empresas privadas. Latam transportó más de seis millones de pasajeros en 2024, mientras que Ripley asegura que las utilidades de fin de 2024 fueron las mejores de su historia y las empresas mineras, manufactureras y comerciales reportaron tener más mercancías en sus inventarios. También se reportó que hubo una caída en los índices de precios del productor facilitado por reducción en costos de producción manufactureros y menor demanda. Dado la guerra comercial de Trump,

³ [Biobío, 20 de marzo de 2025, Cooperativa, 20 de marzo de 2025.](#)

diversas industrias han demandado más cobre por sobre lo previsto y el precio se ha disparado, favoreciendo los ingresos de Chile. También, se reportó una baja en los niveles de desempleo, consolidándose en 8,4%⁴.

Respecto a la gestión económica, el Gobierno se reunió con la nueva directiva de la CPC para abordar temas como la simplificación de permisos para impulsar la actividad económica, favorecer el crecimiento y afrontar la incertidumbre internacional. Esto demuestra la capacidad del progresismo para lograr acuerdos en común con la clase empresarial. En otro caso, el Gobierno en conjunto con los empresarios agroexportadores elaboraron un grupo técnico para mitigar los efectos de los aranceles a la exportación de productos agrícolas impuesto por Donald Trump a partir de abril. Para hacer frente a estas medidas arancelarias, tanto Gobierno como empresarios apuestan por diversificar sus destinos de exportación a Asia y la India. Un artículo de prensa reveló que en Chile la deuda externa llegaría a representar más del 76% del PIB, la cual se compone tanto de la deuda del sector privado como de la deuda gubernamental. Sin embargo, aunque pueda parecer sorpresivo tal nivel de deuda externa, el artículo remarca que el incremento de la deuda se explica por los créditos concedidos a empresas no financieras, mientras que la deuda del Gobierno no muestra gran variación. En cambio, según los datos de Hacienda, la deuda gubernamental bruta representaría el 40% del PIB, una cifra muy por debajo de otros países. Chile logró un acuerdo con el Banco Interamericano del Desarrollo por 180 millones de dólares destinado a mejorar infraestructuras, espacios públicos, patrimonio cultura, diversificación de exportaciones y mejoras en Rapa Nui⁵.

Como se puede observar, la economía chilena parece bien encaminada, pero se podría hacer mucho más para abordar los desafíos pendientes en materia de crecimiento. El crecimiento de los salarios, el Imacec, los ingresos fiscales, las exportaciones, las utilidades de la ENAP y la baja del desempleo, sumado a una inflación controlada y una buena disposición de diálogo entre clase política y empresarial, son uno de los tantos reflejos del progreso económico por el cual atraviesa el país. Sin embargo, el dato que más ha llamado la atención de marzo fue la publicación definitiva del crecimiento económico en 2024.

⁴ [Swissinfo](#), 3 de marzo de 2025, [Biobío](#), 4 de marzo de 2025, [La Tercera](#), 4 de marzo de 2025, [Biobío](#), 6 de marzo de 2025, [Biobío](#), 6 de marzo de 2025, [Diario Financiero](#), 17 de marzo de 2025, [Diario USACH](#), 7 de marzo de 2025, [La Tercera](#), 10 de marzo de 2025, [Biobío](#), 12 de marzo de 2025, [Biobío](#), 12 de marzo de 2025, [Biobío](#), 13 de marzo de 2025, [La Tercera](#), 12 de marzo de 2025, [Biobío](#), 12 de marzo de 2025, [Biobío](#), 24 de marzo de 2025, [Biobío](#), 25 de marzo de 2025, [Diario USACH](#), 28 de marzo de 2025.

⁵ [T13](#), 7 de marzo de 2025, [Biobío](#), 7 de marzo de 2025, [Biobío](#), 10 de marzo de 2025, [El Desconcierto](#), 28 de marzo de 2025.

Según los datos otorgados por el Banco Central, la economía chilena reportó un crecimiento del 2,6% de su PIB. Este crecimiento está por sobre todas las proyecciones previas, las que estimaban que el crecimiento difícilmente pasaría de un 2%. Sin embargo, gracias al comercio exterior y la estabilización macroeconómica del país, se logró un crecimiento bastante positivo.

Pese a ese contexto, aún persisten quienes consideran que crecer un 2,6% es una cifra bastante mediocre y modesta, en comparación al crecimiento del 7-10% de los años 1990. Pero debe considerarse que el PIB de antes era mucho más bajo, siendo matemáticamente más sencillo crecer a ritmos acelerados. Frente a este gran panorama económico, el Presidente Boric acierta al considerar que hay quienes “desde la ignorancia o la mala fe tratan de instalar un discurso de una supuesta crisis y estancamiento económico en Chile”⁶. En realidad, los datos demuestran una economía pujante. Sin embargo, esta buena situación económica carece de facilidades para reflejarse en la opinión pública. Según la encuesta Pulso Ciudadano #104, el 48% considera que la situación económica actual del país es mala o muy mala. Por otro lado, el 43% considera que el próximo año la situación económica estará mucho peor. Estas pesimistas cifras distan mucho de los datos objetivos. De todos modos, el pesimismo económico de una parte de la población puede interpretarse como el reflejo de la insatisfacción ciudadana frente a un progreso económico que no los logra favorecer directamente aún.

4. Avances en seguridad

4.1. Incorporación de Chile a Red Atenas⁷

La Red ATENAS es una iniciativa regional que surge de la colaboración entre países de América del Sur, especialmente aquellos que comparten desafíos comunes en materia de control migratorio y falsificación de documentos; sin embargo, está intrínsecamente vinculada a la experiencia europea de EUROFRONT, que tiene objetivos similares, pero enfocados en Europa. Su origen se remonta a acuerdos establecidos en foros y encuentros regionales, donde naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentar

⁶ [Diario Financiero, 18 de marzo de 2025](#); [Cooperativa, 4 de marzo de 2025](#).

⁷ [El Mostrador, 18 de marzo del 2025](#); [Subsecretaría del Interior, 17 de marzo del 2025](#); [Delegación Europea en Chile, 18 de marzo 2025](#).

problemas transnacionales como el tráfico ilícito de personas y la manipulación de documentos de identidad.

El proyecto nace en un contexto en que los flujos migratorios y la sofisticación de las redes criminales han exigido respuestas coordinadas a nivel regional, lo que llevó a estos países a integrar sus esfuerzos en una red colaborativa. La idea central es compartir información, capacitar a funcionarios y adoptar tecnologías avanzadas para la verificación documental, lo que permite modernizar y sincronizar los sistemas de control fronterizo.

En cuanto al financiamiento, la Red ATENAS se sostiene con aportes mixtos. Los países miembros destinan recursos de sus presupuestos nacionales, mientras que complementos financieros provienen de organismos internacionales y entidades multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y agencias especializadas en seguridad regional. Este modelo mixto facilita la participación de naciones con distintos niveles de recursos, garantizando el acceso a tecnologías y formación necesaria para implementar estándares comunes y mejorar la respuesta frente a la migración irregular y el crimen organizado.

La integración de Chile a esta red, anunciada el 17 de marzo de 2025, evidencia el compromiso del país con la modernización de sus sistemas migratorios y la seguridad fronteriza, posicionándolo como un actor clave en la cooperación regional. La participación conjunta de estos países no solo permite enfrentar desafíos compartidos, sino que también fortalece la estabilidad y la seguridad en toda la región, mediante el intercambio de información y la implementación de soluciones tecnológicas que permitan identificar de forma rápida y precisa documentos fraudulentos.

4.2. Reunión Ministro del interior y Asociación Chilena de Municipalidades⁸

El encuentro del 14 de marzo de 2025 entre el Ministerio del Interior, representado por el ministro Elizalde y la subsecretaria Leitaó, y los directivos de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) evidenció no solo un compromiso por mejorar la coordinación en materia de seguridad pública a nivel municipal, sino también las tensiones políticas que surgen al intentar descentralizar funciones históricamente centralizadas. La reunión sirvió

⁸ [Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 14 de marzo del 2025; Asociación Chilena de Municipalidades, 01 de marzo del 2025; ADN Radio, 14 de marzo del 2025.](#)

para analizar el panorama de una seguridad que, en teoría, debe adaptarse a las realidades locales, reconociendo el papel fundamental que juegan los gobiernos municipales en la prevención del delito y en la respuesta a situaciones de violencia. En este sentido, se resaltó la urgencia del Proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que se encuentra en su última etapa legislativa y aspira a dotar a los municipios de mayores facultades y recursos, en un esfuerzo por dinamizar la gestión de la seguridad de manera más ajustada a las necesidades territoriales.

Uno de los temas más debatidos fue la autorización para que agentes municipales porten armas no letales, específicamente, pistolas *taser*. La propuesta se fundamenta en la idea de que estos instrumentos podrían complementar la acción policial en escenarios donde la respuesta de las fuerzas tradicionales resulta insuficiente o tardía. Sin embargo, esta medida genera un fuerte contrapunto ideológico, que se manifestó en el debate legislativo. Mientras que en comunas con suficiente infraestructura y recursos, donde ya operan sistemas de seguridad robustos, la medida podría tener un carácter funcional y preventivo, en zonas más vulnerables y con menos recursos existe el riesgo de que, sin un adecuado soporte institucional, la entrega de estas herramientas se vuelva ineficaz o, peor aún, contraproducente. La realidad es que en las comunas económicamente desfavorecidas se evidencian carencias en personal capacitado, protocolos operativos sólidos y mecanismos de fiscalización, lo que podría derivar en un uso abusivo de estas armas y profundizar las desigualdades territoriales.

Este escenario se ve agravado por la disputa sobre quién debe ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza, un debate que encuentra eco en posturas históricas de la política chilena. Los sectores de izquierda han expresado su preocupación ante la delegación de funciones coercitivas a funcionarios municipales, temiendo que esta medida se convierta en una forma de “militarización” local sin los controles necesarios. Según estas críticas, una seguridad descentralizada que no cuente con recursos permanentes ni con una coordinación efectiva puede llevar a la fragmentación del sistema y a la consolidación de un modelo de seguridad disgregado, donde solo beneficie a las comunas más acomodadas y deje en desventaja a aquellas con contextos más complejos y violentos.

La discusión también ha dejado en evidencia la importancia de establecer un financiamiento permanente y suficiente para implementar estas medidas de forma efectiva. La viabilidad del proyecto no depende únicamente de su aprobación legislativa, sino también de la capacidad del Estado y de los gobiernos locales para asignar recursos que permitan la capacitación continua del personal, la implementación de protocolos

claros y el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas. Sin este soporte, las buenas intenciones podrían quedarse en declaraciones de compromiso, sin lograr transformar de manera real las condiciones de seguridad en el país.

En este contexto, el diálogo entre el Ministerio del Interior y la AChM no solo revela la voluntad política de avanzar hacia un modelo de seguridad adaptado a las particularidades territoriales, sino que también pone de manifiesto las dificultades inherentes a la descentralización en un entorno marcado por desigualdades históricas. La reforma busca, en teoría, empoderar a los municipios para que respondan de manera más ágil y efectiva ante la delincuencia, pero su éxito estará condicionado por la capacidad de subsanar las brechas de recursos, coordinación y formación que existen entre las distintas comunas. Solo superando estos desafíos será posible que la seguridad municipal se consolide como una alternativa viable y equitativa para todos los ciudadanos.

4.3. Directrices a Carabineros de Chile bajo la administración de Elizalde⁹

El Ministerio del Interior ha desarrollado durante marzo de 2025 una serie de encuentros estratégicos que establecen nuevos lineamientos para Carabineros de Chile, marcando un hito en la configuración de las políticas de seguridad pública. El proceso inició el 14 de marzo con un inédito encuentro conjunto entre el Ministro Elizalde, altos mandos de Carabineros y la PDI, donde se acordó fortalecer sustancialmente la coordinación interinstitucional mediante sistemas integrados de inteligencia policial. Este primer encuentro sentó las bases para un modelo de trabajo colaborativo que busca superar los históricos problemas de fragmentación en la gestión de seguridad.

La estrategia adquirió mayor concreción el 20 de marzo durante la reunión del Ministro con comisarios de Carabineros de todo el país, donde se impartieron los lineamientos estratégicos nacionales. Estos incluyen la implementación de un modelo de vigilancia territorial inteligente que combina tecnología avanzada con análisis de datos, junto con el fortalecimiento de capacidades especializadas para enfrentar delitos complejos. Paralelamente, se enfatizó la necesidad de mejorar los sistemas de respuesta policial y desarrollar un trabajo preventivo más cercano a las comunidades, lo que representa un cambio significativo respecto a enfoques tradicionalmente reactivos.

⁹ [Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 14 de marzo del 2025](#); [Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 19 de Marzo del 2025](#); [Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 20 de marzo del 2025](#).

Un componente innovador de esta estrategia fue la jornada de trabajo con representantes de empresas estratégicas, donde se establecieron protocolos para la protección de infraestructura crítica. Esta articulación público-privada introduce una nueva dimensión en el modelo de seguridad, aunque plantea desafíos importantes en cuanto a delimitación de responsabilidades y mantenimiento de estándares de transparencia. La participación del sector privado podría optimizar recursos, pero requiere mecanismos claros que preserven el carácter público de las funciones de seguridad.

El análisis de estos anuncios revela un enfoque integral que busca equilibrar modernización tecnológica con especialización policial y prevención comunitaria. No obstante, la implementación efectiva enfrenta desafíos críticos que incluyen la garantía de recursos suficientes, la articulación con estructuras operativas existentes y el mantenimiento del equilibrio entre eficiencia policial y protección de derechos ciudadanos. Para asegurar el éxito de estas iniciativas, resulta fundamental establecer mecanismos robustos de monitoreo y evaluación, garantizar transparencia en los acuerdos con el sector privado, desarrollar programas de capacitación continua e implementar indicadores de desempeño que midan tanto la eficacia operativa como la percepción ciudadana. Estas directrices representan un avance significativo en la modernización institucional, aunque su impacto real dependerá de la capacidad para traducirlas en acciones concretas con adecuados recursos institucionales y sistemas de supervisión independientes.

4.4. Asesinato de matrimonio en Graneros: qué se sabe del crimen y sus repercusiones en la discusión política¹⁰

El brutal asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros, ocurrido el 12 de marzo de 2025, ha conmocionado a la opinión pública y reavivado el debate sobre políticas de seguridad en Chile. Según la información disponible, las víctimas —identificadas como un reconocido comerciante local y su esposa— fueron atacadas en su domicilio en un hecho que la Fiscalía Regional de O'Higgins ha calificado como violento, confirmando que hubo intercambio de disparos durante el incidente. Las investigaciones preliminares barajan

¹⁰ [T13, 18 de marzo del 2025](#); [La Tercera, 13 de marzo del 2025](#); [Emol, 12 de marzo del 2025](#); [La Tercera, 12 de marzo del 2025](#); [El Desconcierto, 22 de marzo del 2025](#).

diversas hipótesis, incluyendo posibles vínculos con el crimen organizado, aunque no se han descartado otras líneas de investigación.

El asesinato del matrimonio ha generado una respuesta política predecible dentro del actual contexto electoral. Por un lado, el gobierno optó por presentar una querrela criminal, medida principalmente simbólica que busca proyectar firmeza institucional ante la opinión pública. Por otro, figuras opositoras como Evelyn Matthei y Sebastián Kaiser han aprovechado el caso para reactivar el debate sobre la pena de muerte, pese a su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico chileno y los tratados internacionales suscritos por el país.

Este fenómeno responde a un patrón recurrente en política criminal, donde casos de alta connotación mediática son instrumentalizados para promover agendas punitivistas. La evidencia comparada demuestra que la pena de muerte no reduce los índices delictuales y conlleva graves riesgos de error judicial irreversible. Además, Chile cuenta con mecanismos alternativos más efectivos, como el fortalecimiento de las fiscalías locales, la modernización de los sistemas de inteligencia policial y la implementación de programas de prevención situacional.

El verdadero desafío que plantea este caso no radica en discutir medidas ya superadas por el consenso internacional en derechos humanos, sino en mejorar la capacidad institucional para investigar y sancionar delitos violentos. Experiencias exitosas en otros países muestran que la combinación de policías comunitarias, sistemas de alerta temprana y coordinación interinstitucional ofrece mejores resultados que las soluciones simplistas basadas únicamente en el endurecimiento penal.

La coyuntura electoral actual, con precandidatos liderando las encuestas que promueven regresiones en materia de derechos humanos, exige un debate informado sobre seguridad ciudadana y los efectos reales que puede tener en ella la implementación de medidas como la pena de muerte. Chile necesita políticas públicas basadas en evidencia empírica antes que en cálculos políticos de corto plazo; el crimen de Graneros debería servir para evaluar las fallas del sistema de justicia criminal, no para revivir debates superados que contradicen el marco jurídico nacional e internacional.

5. Contexto Internacional

5.1. Guerra Rusia-Ucrania e intervención de EE.UU.¹¹

En marzo de 2025, la guerra entre Rusia y Ucrania entró en una fase de relativo estancamiento militar, con un notorio descenso en el ritmo de avance ruso, al tiempo que se reactivaron con fuerza las gestiones diplomáticas para alcanzar una tregua parcial. Este cambio estuvo acompañado por una mayor implicancia de Estados Unidos, que asumió un rol protagónico tanto en las negociaciones políticas como en la asistencia económica a Ucrania. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas redujeron drásticamente su expansión territorial, pasando de más de 600 kilómetros cuadrados tomados en noviembre de 2024 a poco más de 200 en marzo, producto en parte de la resistencia ucraniana y contraofensivas localizadas, especialmente en zonas clave como Toretsk y Pokrovsk, en la región de Donetsk.

En paralelo, la administración Trump activó una ofensiva diplomática orientada a aliviar las tensiones. A comienzos del mes, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Yeda, Arabia Saudita, con el objetivo de explorar vías de salida negociada. Como resultado, el 18 de marzo la Casa Blanca anunció un entendimiento preliminar entre Trump y Putin para establecer un cese al fuego limitado, centrado en la protección de infraestructura energética e industrial crítica, considerado un primer paso hacia un eventual acuerdo más amplio, aunque aún lejano.

De forma complementaria, en febrero de 2025 ambos países suscribieron el Acuerdo de Recursos Minerales, mediante el cual Ucrania cede el 50% de sus ingresos futuros provenientes de recursos estratégicos estatales a un fondo de reconstrucción administrado junto a Estados Unidos, a cambio de apoyo financiero sostenido. Este pacto consolida una alianza económica con claros componentes geopolíticos, reforzando la influencia occidental sobre sectores clave para la seguridad energética global.

Ante este panorama y la posibilidad de una menor implicancia estadounidense en el escenario europeo, líderes como Keir Starmer y Emmanuel Macron promovieron la formación de una “coalición de los dispuestos”, con el objetivo de garantizar la seguridad de Ucrania y respaldar las negociaciones de paz desde Europa. Esta iniciativa se formalizó

¹¹ [France 24, 06 de abril del 2025](#); [Infobae, 02 de Abril del 2025](#); [France 24, 31 de marzo del 2025](#); [France 24, 20 de marzo del 2025](#).

en la Cumbre de Londres del 2 de marzo, con participación de 16 países, la Unión Europea y la OTAN, marcando un esfuerzo por reafirmar el compromiso occidental con Ucrania en un contexto de transición en el liderazgo internacional.

La desaceleración del conflicto y el incipiente giro hacia soluciones diplomáticas podrían representar un punto de inflexión tanto para el sistema internacional como para regiones periféricas como América Latina. El rol de Estados Unidos en las negociaciones, centrado en acuerdos específicos y beneficios económicos, refleja una redefinición de su liderazgo global bajo un enfoque más transaccional, lo que genera un vacío de poder que actores como China o la propia Unión Europea buscan ocupar. Para Chile, estas dinámicas internacionales abren múltiples frentes de atención.

En primer lugar, el creciente valor estratégico de los recursos naturales, como los minerales críticos, exige una política exterior activa y una visión de largo plazo que permita resguardar la soberanía económica sin quedar marginados de las principales cadenas de valor global. En segundo lugar, el desplazamiento del multilateralismo clásico hacia coaliciones *ad hoc* obliga a reforzar la capacidad diplomática regional, para asegurar una voz influyente en escenarios internacionales más fragmentados. Finalmente, la prolongación del conflicto o su resolución parcial podrían generar efectos indirectos en los mercados globales que afecten los precios de la energía, los alimentos y las materias primas, elementos clave para una economía abierta como la chilena. En este contexto, Chile debe mantenerse alerta ante los reajustes en el orden mundial, fortalecer su inserción estratégica y anticiparse a los posibles impactos geopolíticos, económicos y diplomáticos derivados de esta guerra que, aunque lejana en términos geográficos, incide profundamente en la estabilidad global.

5.2. Salvador a disposición de EE.UU: Claves del traslado de reos a mega cárcel de Bukele¹²

Durante el primer trimestre de 2025, la administración del presidente Donald Trump formalizó un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele que habilita el traslado de individuos privados de libertad desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel salvadoreña reconocida internacionalmente por su régimen penitenciario de máxima severidad. Este convenio ha sido interpretado por diversos

¹² [The New York Times, 02 de Febrero del 2025](#); [BBC Mundo, 17 de marzo del 2025](#); [T13, 16 de marzo del 2025](#); [Los Angeles Times, 16 de marzo del 2025](#).

analistas como una manifestación explícita de la externalización de políticas penales y de control migratorio por parte de una potencia hegemónica hacia un Estado periférico dispuesto a asumir el rol de enclave carcelario regional.

En términos operativos, el acuerdo contempla la transferencia de personas —en su mayoría migrantes latinoamericanos con presuntas vinculaciones a estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha— bajo figuras jurídicas excepcionalistas, como la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta normativa, prácticamente en desuso durante más de un siglo, ha sido reactivada para habilitar procedimientos de deportación sumaria, sin garantías plenas de debido proceso ni mecanismos eficaces de defensa judicial. Este giro autoritario dentro del régimen legal estadounidense ha suscitado fuertes críticas de sectores académicos, organismos de derechos humanos y operadores del sistema judicial, quienes denuncian la configuración de un "estado de excepción selectivo" dirigido a poblaciones migrantes racializadas.

Desde una perspectiva geopolítica, el acuerdo refuerza una alianza estratégica entre dos liderazgos que comparten una visión punitivista y altamente centralizada del poder estatal. Mientras que para el gobierno de Trump el traslado de estos detenidos constituye una medida performativa destinada a capitalizar políticamente el discurso antiinmigración, en el caso de Bukele, el CECOT opera como un dispositivo de legitimación interna y externa, que le permite proyectarse como un líder regional en la "guerra contra el crimen". Esta sinergia configura una coalición transnacional de gobiernos autoritarios funcionales que instrumentalizan la seguridad pública como herramienta de consolidación del poder político.

Las implicancias de este proceso son múltiples. En primer lugar, se observa un debilitamiento del marco normativo internacional en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo a las garantías del debido proceso, la protección de migrantes y el principio de no devolución. En segundo lugar, se abre un precedente peligroso en términos de gobernanza global de la penalidad, en la medida que Estados con mayor capacidad financiera transfieren sus cargas punitivas a países con menores estándares de control institucional. Esta dinámica podría traducirse en una suerte de "mercado de la cárcel", donde se terceriza la función punitiva a cambio de recursos económicos y respaldo político.

Para América Latina, y especialmente para países como Chile, esta reconfiguración plantea desafíos importantes. Por un lado, obliga a repensar el posicionamiento regional frente a nuevas formas de intervención y cooperación asimétrica que erosionan principios fundamentales del derecho internacional. Por otro, evidencia el riesgo de que el modelo salvadoreño —basado en la excepcionalidad penal, la militarización del orden interno y la supresión de garantías— adquiera legitimidad como política pública exportable, especialmente en contextos de crisis de seguridad o desafección ciudadana hacia la democracia representativa. En este sentido, la consolidación de estas alianzas autoritarias en el continente podría profundizar la fragmentación del orden liberal internacional, debilitando aún más los espacios multilaterales de gobernanza democrática.

En suma, el traslado de detenidos desde Estados Unidos al CECOT no puede ser leído únicamente como una medida de política migratoria o penitenciaria, sino como un indicador crítico de las transformaciones estructurales en curso dentro del sistema internacional contemporáneo: una creciente transnacionalización de la penalidad, el retroceso de las garantías jurídicas, y el ascenso de regímenes híbridos que combinan legalismo autoritario con altos niveles de eficiencia coercitiva.

5.3. Guerra comercial de EE.UU. hacia el resto del mundo¹³

Durante marzo de 2025, la administración Trump profundizó su política de proteccionismo económico mediante una nueva batería de medidas arancelarias dirigidas contra algunos de sus principales socios comerciales, reavivando la guerra comercial en un contexto global ya tensionado por la inestabilidad geopolítica y la desaceleración económica. Bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y reconstruir la soberanía manufacturera, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá, con un tratamiento diferencial del 10% a los productos energéticos provenientes de este último país. Asimismo, elevó los aranceles a las importaciones chinas del 10% al 20%, justificando esta decisión con base en prácticas comerciales "desleales" y amenazas estratégicas a sus cadenas de suministro críticas.

Estas acciones generaron respuestas inmediatas: Canadá anunció medidas de represalia por un valor de USD 21 mil millones, dirigidas principalmente a productos agroindustriales,

¹³ [BBC Mundo, 12 de marzo del 2025](#); [El País, 02 de abril del 2025](#); [BBC Mundo, 03 de abril del 2025](#); [El País, 04 de abril del 2025](#); [Biobío, 07 de abril del 2025](#).

tecnológicos y farmacéuticos estadounidenses. La Unión Europea, si bien no fue directamente afectada en esta ronda, manifestó su solidaridad con los países sancionados y dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas espejo. China, por su parte, convocó a consultas multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y fortaleció acuerdos bilaterales con socios del Sur Global, como India, Brasil y Sudáfrica, para contener los efectos sistémicos de la política arancelaria estadounidense.

Las implicancias de esta nueva etapa de guerra comercial son múltiples. A nivel sistémico, la intensificación de las medidas proteccionistas por parte de Washington profundiza la erosión del orden económico liberal inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial, en particular la vigencia de instituciones como la OMC y los acuerdos multilaterales que han regulado el comercio global en las últimas décadas. A esto se suma un escenario de creciente multipolaridad, en el cual bloques emergentes como los BRICS se posicionan no sólo como contrapeso económico, sino también como espacios de gobernanza alternativa que desafían la arquitectura institucional dominada por Occidente.

Desde un punto de vista estructural, esta estrategia evidencia un desplazamiento del paradigma globalista hacia formas de soberanismo económico y neomercantilismo, en las cuales los Estados priorizan la autosuficiencia estratégica por sobre la integración interdependiente. Este giro tiene efectos directos sobre el flujo de bienes, servicios y capitales, incrementando los costos de transacción y reconfigurando las cadenas de suministro globales. También produce un impacto redistributivo: mientras algunos sectores industriales en economías centrales pueden beneficiarse a corto plazo, los países en desarrollo enfrentan mayores barreras de acceso a mercados clave y una reducción de márgenes de maniobra en el comercio internacional.

Desde una perspectiva que integra tanto consideraciones económicas como geopolíticas, se observa que las recientes declaraciones de Trump han generado un ambiente de notable incertidumbre en el ámbito internacional. Axel Christensen, economista de BlackRock, señaló en Tele13 Radio que “no necesariamente serán medidas que se apliquen, sino que las utilizarán como herramienta de negociación”, subrayando la ambigüedad en torno a la implementación y efectos de tales políticas ([Tele13 Radio](#)). En paralelo, Álvaro García, entrevistado por Cooperativa, advirtió que “el anuncio de aranceles es una muy mala noticia para un país pequeño como Chile, que depende de sus exportaciones”, lo que presagia un incremento en los costos de producción y una pérdida de competitividad en el mercado global ([Cooperativa](#)). Asimismo, Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión

Nacional de Evaluación y Productividad, enfatizó que estos gravámenes actúan como un impuesto indirecto que intensifica la lucha por el control de la economía mundial, elevando así el riesgo de desencadenar una guerra comercial en un contexto de interdependencia. Por su parte, Heraldo Muñoz, en una entrevista con [El País](#), advirtió que, en el eventual fortalecimiento de una administración Trump sin restricciones, Chile se vería forzado a asumir una mayor exposición a la inestabilidad externa, lo cual comprometería la predictibilidad de los mercados. De esta manera, se teme, transversalmente, por la inestabilidad e incertidumbre de la economía mundial y cómo esto podría afectar a Chile, caracterizado por su economía altamente liberalizada.

Y es que para Chile, estas transformaciones representa un enorme desafío. Por un lado, el incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios tradicionales amenaza con reducir el dinamismo de la economía global, encarecer insumos importados y generar volatilidad en los mercados financieros, lo cual podría afectar negativamente las exportaciones chilenas —especialmente aquellas ligadas a commodities como el cobre o el litio—. Además, una eventual caída del consumo global debido a la contracción de las cadenas de suministro podría frenar las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo.

Sin embargo, este escenario abre también un espacio para la reorientación estratégica del posicionamiento internacional chileno. Ante una posible retracción de la hegemonía estadounidense y el debilitamiento de las instituciones multilaterales occidentales, Chile podría explorar con mayor decisión su vinculación con el bloque BRICS, que ha expresado su interés en incorporar nuevos miembros y consolidarse como un polo de gobernanza económica alternativo. Esta apertura podría representar una oportunidad para diversificar alianzas, ampliar mercados y posicionarse en sectores clave como la transición energética, la tecnología verde y los minerales estratégicos. A su vez, permitiría a Chile participar más activamente en debates globales sobre la reforma del sistema financiero internacional, la arquitectura de pagos alternativos al dólar, y la creación de fondos multilaterales para el desarrollo sostenible.

De esta forma, la guerra arancelaria liderada por Estados Unidos no sólo revela una crisis de legitimidad del orden económico liberal, sino que también obliga a países intermedios como Chile a replantear sus estrategias de inserción internacional. Todo esto podría marcar un punto de inflexión: avanzar hacia una mayor autonomía estratégica o mantenerse anclado a una arquitectura en declive. La decisión no es únicamente económica, sino profundamente política.

5.4. Estrechez de lazos entre Chile e India: un nuevo acercamiento al grupo BRICS¹⁴

La reciente visita del presidente Gabriel Boric a la India, realizada a fines de marzo de 2025, subraya la creciente importancia que Chile otorga a fortalecer sus relaciones con economías emergentes de alto dinamismo. Esta iniciativa busca diversificar las alianzas estratégicas y mitigar los efectos adversos derivados de las tensiones comerciales globales, especialmente en el contexto de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.

Durante su estadía, Boric sostuvo encuentros con el primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta Draupadi Murmu, centrados en transformar el actual Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde 2007 y ampliado en 2017, en un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral. Este nuevo marco busca ampliar y profundizar la cooperación bilateral en áreas clave como inversión, tecnología y cultura.

India, con más de 1.425 millones de habitantes y posicionada como la quinta economía mundial, presenta un mercado en constante expansión, impulsado por una creciente clase media y una acelerada urbanización. Para Chile, fortalecer lazos con India ofrece oportunidades significativas para diversificar sus exportaciones, especialmente en sectores como frutas frescas, vinos y productos cárnicos. Sin embargo, para materializar este potencial, es esencial abordar desafíos como los elevados aranceles que India impone a estos productos, lo que requiere negociaciones enfocadas en lograr reducciones arancelarias que faciliten un acceso más competitivo al mercado indio.

Además, la complementariedad entre ambas economías se extiende al ámbito de los recursos naturales y la tecnología. Chile, como proveedor de minerales críticos para la transición energética, puede beneficiarse de la avanzada capacidad tecnológica de India, fomentando alianzas estratégicas en innovación y desarrollo.

La profundización de la relación con India no solo diversifica las relaciones económicas de Chile, sino que también posiciona al país en un escenario internacional más equilibrado, reduciendo la dependencia de mercados tradicionales y fortaleciendo su inserción en el dinámico mercado asiático. Esta estrategia de diversificación es crucial para enfrentar la volatilidad del comercio global y aprovechar las oportunidades que ofrecen las economías emergentes.

¹⁴ [Diario Financiero, 01 de abril del 2025](#); [Cooperativa, 01 de abril del 2025](#); [Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 03 de abril del 2025](#); [Prensa Presidencia, 05 de abril del 2025](#); [La Tercera, 07 de abril del 2025](#).